



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 14 de septiembre de 2020

AUTO No.

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

MEDIO CONTROL:	DE	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:		76-001-33-33-015-2019-00227-01
DEMANDANTE:		HUGO EMIRO CORDOBA OROZCO notificacionescali@giraldoabogados.com.co
DEMANDADO:		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
ASUNTO		APELACIÓN DE AUTO – REVOCA EL AUTO QUE NO LIBRÓ MANDAMIENTO DE PAGO

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto nro. 562 del 16 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado 15 Administrativo de Cali, que negó el mandamiento de pago dentro de la acción ejecutiva propuesta por el señor Hugo Emiro Córdoba contra el Municipio de Santiago de Cali.

2. ANTECEDENTES

En ejercicio del proceso ejecutivo, el señor Hugo Emir Córdoba Orozco solicitó librar mandamiento de pago contra el Municipio de Santiago de Cali por las siguientes sumas de dinero: i) \$ 3.397.053 por concepto de capital correspondiente a la prima de servicios de los años 2009 al 2013, ii) \$ 285.132 por los intereses DTF, iii) \$ 2.546.231 por intereses corrientes y moratorios sobre la anterior suma de dinero desde la fecha en que se hizo exigible la obligación, hasta la fecha en que se haga exigible el pago y 4) por costas del proceso ordinario¹.

2.1. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 562 del 16 de septiembre de 2019, el Juzgado 15 Administrativo de Cali negó el mandamiento de pago solicitado por el señor Hugo Emir Córdoba Orozco en contra del Municipio de Santiago de Cali. Los argumentos expuestos fueron los siguientes:

Que el título ejecutivo objeto del presente medio de control se encuentra viciado de ilegalidad, pues si bien es cierto, la sentencia ejecutoriada es inmutable e inimpugnable, también lo es, que esa obligatoriedad no es absoluta sino relativa, pues si se pide dar cumplimiento a un fallo contrario a derecho, el juez puede abstenerse de hacerlo efectivo.

¹ Folio 1-7

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



Que en el presente asunto se ordenó al municipio, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento, liquidación y pago al señor Hugo Emiro Córdoba de la prima de servicios que se ha causado a partir del 25 de enero de 2009 en adelante, aplicando para su liquidación el artículo 60 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el artículo 7 del Decreto 31 de 1997.

Que existe unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado con relación a la prima de servicios de los docentes, que determinó que los nacionales vinculados antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 no tienen derecho al reconocimiento de la prima de servicios, por tanto, no está obligado a hacer cumplir una decisión contraria a derecho. Explicó lo siguiente:

Ahora, si bien pudiera aseverarse que estamos en presencia del principio de la cosa juzgada y que esta lo que busca es preservar la seguridad jurídica para la conservación de un orden justo, esa justicia no puede predicarse cuando la decisión se tomó con fundamento en una interpretación equivocada de la norma y/o en completa contravía de lo que expresamente consagra la misma. Cuando se hace la declaración de un derecho a favor de una persona en estas especialísimas circunstancias, la cosa juzgada pierde su carácter absoluto y la trascendencia social, pues no puede obligarse a un funcionario judicial a su ejecución de manera automática, toda vez que si bien es cierto los jueces están sometidos al imperio de la ley, no es menos veraz que esa obligatoriedad se pierde cuando el derecho no se adquiere con arreglo a las leyes vigentes.

Consecuentemente con lo anterior, no puede decirse la existencia de un título ejecutivo a favor de la parte actora y a cargo de la parte señalada como extremo pasivo, pues sus fundamentos y parte resolutive, devienen de la errada interpretación de una norma que la torna ilegal y por ende concluye el despacho que no hay lugar a librar mandamiento ejecutivo frente a la demandada y adicionalmente se dispondrá la devolución de los anexos al demandante y el archivo de las presentes diligencias.

2.2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación² contra la decisión tomada por el Juzgado 15 Administrativo de Cali.

Expuso que el artículo 297 CPACA y el artículo 422 CGP determinan que las sentencias ejecutoriadas, que disponen condena o pago de sumas dinerarias, pueden ser cobradas ejecutivamente.

Consideró que el *a quo* se apartó de la orden del superior y vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia y el respeto por los derechos, porque, a su juicio, no hay lugar a analizar un asunto que ya fue resuelto y hace tránsito a cosa juzgada, con razones transgresoras del principio a la seguridad jurídica. Dijo que permitir la postura del juzgado sería aceptar que ninguna sentencia adquiere firmeza y puede ser revisada y desacatada en cualquier momento. Adicionalmente argumentó:

² Folio 63-68

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



En consecuencia, no obstante la casi obligatoriedad de acoger una sentencia de unificación jurisprudencial (precedente), en el caso concreto, resulta intemporal, pues, se repite la providencia de segunda instancia- ejecutoriada- que sirve de título ejecutivo proferida por el Tribunal del Valle dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoado por la demandante contra el Municipio de Santiago de Cali en la cual se le reconoció la prima de servicios como factor salarial, fue expedida en fecha anterior a la sentencia que unificó jurisprudencia frente a tal asunto, aludida en el auto que se impugna.

CONSIDERACIONES:

1. COMPETENCIA

Por remisión expresa de los artículos 299 y 306 del CPACA, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP, el auto que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago es susceptible del recurso de apelación, y el Tribunal es competente en segunda instancia para resolverlo. Textualmente dice:

Art. 321. Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que dicten en equidad.

También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

(...)

4.- El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.

(...)

Por su parte, el artículo 243 del CPACA dispone que son apelables los siguientes autos:

Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

3. El que ponga fin al proceso.

2. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala debe establecer si la providencia apelada, que negó el mandamiento de pago al estimar que la sentencia que se pretende ejecutar fue expedida sin tener en cuenta el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que negó el reconocimiento y pago de una prima de servicios a los docentes, debe revocarse por vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia y la cosa juzgada.

3. TESIS DEL DESPACHO

El Despacho revocará la decisión apelada, pues la finalidad del proceso ejecutivo no es analizar si los argumentos expuestos en una sentencia que se pretende ejecutar son acordes a derecho, y revivir conflictos que constituyen cosa juzgada, sino determinar si la obligación que se pretende ejecutar constituye una obligación clara, expresa y exigible para así librar el correspondiente mandamiento de pago. Además, porque el



precedente utilizado para negar el mandamiento de pago no es aplicable en este caso, pues en el caso citado se abordaron supuestos fácticos y jurídicos diferentes.

4. CASO CONCRETO

4.1. REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO:

La finalidad del proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho que tiene el ejecutante de reclamar del ejecutado el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible.

El artículo 422 del CGP establece:

Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

De conformidad con el artículo transcrito, es claro que son demandables en proceso ejecutivo las obligaciones claras, expresas y exigibles que emanen de una sentencia de condena. Sin embargo, antes de analizar ese aspecto, se harán algunas precisiones.

El título ejecutivo debe reunir condiciones formales y de fondo. Las primeras condiciones tienen que ver con que se trate de documento o documentos que conformen unidad jurídica, que sea o sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Las exigencias de fondo son las que atienden a que de esos documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, una obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero.

Que la obligación sea **expresa** significa que aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece, tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. «Faltaría este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta»³.

³ Morales Molina, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. El proceso Civil. Tomo II.

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



La obligación es **clara** cuando además de expresa aparece determinada en el título, debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

La obligación es **exigible** cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición.

El título ejecutivo, en materia contencioso administrativa, se encuentra previsto en el artículo 297 del CPACA, así:

ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.” (subrayado fuera del texto).

Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. Sobre el particular, el Consejo de Estado⁴ expuso:

Advierte la Sala que esta Corporación ha señalado que por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez... en los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sea una providencia judicial, como en el presente caso, por regla general para reclamar las acreencias pretendidas se requiere de un título complejo, consistente en la decisión judicial y el acto administrativo que cumple de manera parcial la obligación impuesta en la providencia.

⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 4 de febrero de 2016 proceso nro. 11001-03-15-000-2015-03434-00(AC).

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



4.2. SOLUCIÓN DEL CASO

En el presente asunto, el apoderado judicial de la parte demandante presentó demanda ejecutiva en contra del Municipio de Santiago de Cali con el fin de obtener, con base en la sentencia del 19 de noviembre de 2013 proferida por esta Corporación, el pago de: i) \$ 3.397.053, por concepto de capital correspondiente a la prima de servicios de los años 2009 al 2013, ii) \$ 285.132 por los intereses DTF, iii) \$ 2.546.231 por intereses corrientes y moratorios sobre la anterior suma de dinero, desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta la fecha en que se haga exigible el pago, y iv) por costas en el proceso ordinario.

Mediante sentencia del 19 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia proferida por el Juzgado 15 Administrativo de Cali y ordenó al Municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar la prima de servicios al señor Hugo Emir Córdoba Orozco causada desde el 25 de enero de 2009 en adelante⁵, providencia que, según constancia secretarial, quedó ejecutoriada el 14 de enero de 2014⁶.

El Juzgado 15 Administrativo de Cali, mediante auto nro. 562 del 16 de septiembre de 2019⁷, negó el mandamiento de pago solicitado. Argumentó que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo no se ajusta a derecho, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado unificó la postura del reconocimiento y pago de la prima de servicios a los docentes y, por tanto, el fallo que se pretende ejecutar es contrario al presente jurisprudencial y legal, lo que impide librar mandamiento de pago. Fundamentó la decisión en una providencia del 14 de marzo de 2019, proferida por la Sala de Decisión nro 4 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 8.

Para resolver se considera:

El numeral 1 del artículo 297 del CPACA dispone que constituyen título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo⁹.

La regulación del proceso ejecutivo contenida en el CPACA y en el CGP determinan que, cuando se solicita la ejecución de un título ejecutivo, el juez debe analizar si cumple con las condiciones formales y de fondo encaminadas a determinar: 1) que se trate de documento o documentos que conformen unidad jurídica, que sea o sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena

⁵ Folios 21-42.

⁶ Folio 43

⁷ Folio 58-61

⁸ Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, providencia del 14 de marzo de 2019, expediente 76001-33-33-015-2017-00190-01.

⁹ Artículo 297 del CPACA. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo: 1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción entre otros y 2) que sea una obligación clara, expresa y exigible.

El proceso ejecutivo no está instituido para reabrir debates que ya fueron zanjados a través a través de una sentencia ejecutoriada, pues aceptar lo contrario desnaturalizaría las reglas que rigen dicho procedimiento. Tan es así, que el artículo 422 del CGP dispone que solo puede demandarse, entre otros títulos ejecutivos, las obligaciones exigibles, que para el caso de las sentencias judiciales significa que se encuentren ejecutoriadas.

Además, el artículo 298 del CPACA¹⁰ determinó que en los casos en que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo haya proferido una sentencia que se encuentre debidamente ejecutoriada, una vez transcurrido el término para su cumplimiento, *«sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato»*.

Por tanto, el *a quo*, para negar el mandamiento de pago solicitado, debió analizar si se cumplen las condiciones formales y de fondo para su procedencia, pues los argumentos plasmados en el auto nro. 562 del 16 de septiembre de 2019 carecen de fundamento legal y desconocen el derecho de acceso a la administración de justicia y la cosa juzgada, pues, el demandante, previo a la expedición de la sentencia que pretende ejecutar, sometió las pretensiones a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que logró que fuera reconocida la acreencia laboral que hoy reclama su ejecución. Por tanto, resulta improcedente que en este proceso el *a-quo* pretenda debatir un conflicto *inter partes* que ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de la sentencia del 19 de noviembre de 2013.

Como lo consagra el artículo 303 del CGP *«la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada...»*. La cosa juzgada busca la intangibilidad e inimpugnabilidad de las decisiones judiciales, con el objetivo de brindar una seguridad jurídica, para evitar que los administradores de justicia y los ciudadanos inicien procesos en los que se controviertan los mismos hechos y derechos que ya fueron definidos judicialmente.

En este punto, es pertinente recordar que frente al reconocimiento y pago de la prima de servicios a favor de los docentes, durante un tiempo considerable hubo disparidad de criterios y que fue a raíz de dicha discrepancia que el Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación del 14 de abril de 2016¹¹; providencia en la que se llevó a cabo el análisis de los argumentos que sustentaban las dos posturas y utilizó varias reglas y métodos de interpretación, de acuerdo a la Constitución, para concluir que la Ley 91 de 1989 no crea ni reconoce a favor de los docentes oficiales la prima de servicios contemplada en el Decreto Ley 1042 de 1978, y que sólo a partir del año 2014, dichos

¹⁰ Inicio primero del artículo 298 del CPACA. *“En los casos a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato”*.

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



servidores adquirieron el aludido derecho, por cuanto así lo dispuso el Decreto 1545 de 2013.

No obstante, la sentencia objeto de ejecución fue proferida con anterioridad a que el Consejo de Estado unificara el criterio frente al reconocimiento de la prima de servicios a favor de los docentes. Luego, incluso, siendo permitido efectuar un análisis de legalidad del título ejecutivo, más allá de la verificación de que este sea claro, expreso y exigible, resulta extremadamente gravoso negar el mandamiento de pago pretendido en el presente caso, bajo el argumento consistente en que éste es ilegal en aplicación a un precedente jurisprudencial emitido con posterioridad a la ejecutoria de la providencia cuyo cumplimiento se pretende.

La providencia impugnada fundamentó la decisión en una providencia dictada por esta Corporación (2019), con supuestos fácticos y jurídicos diferentes al presente caso, pues, en esa oportunidad, se trataba de un conflicto jurídico entre la parte demandante y la UGPP sobre descuentos en salud en la pensión gracia (caso diferente al presente). En esa oportunidad, se negó el mandamiento de pago porque existían unos actos administrativos de la entidad que fundamentaron el incumplimiento de la sentencia judicial en la sentencia T-835 de 2014, que dijo que esos descuentos eran legales y que los jueces administrativos habían incurrido en defecto sustantivo, por lo que la providencia del Tribunal dijo que el acto administrativo de cumplimiento de la sentencia debía ser demandado nuevamente. En concreto, dijo:

En el caso de marras, corresponderá al Juez Administrativo determinar si la negativa del ente ejecutado en el cumplimiento de la obligación satisface los presupuestos indicados, esto es, si la entidad ha motivado su decisión; si existe notoriedad en la ilegalidad de lo ordenado tal como lo dispone la Corte Constitucional; si el cumplimiento del fallo configura una grave amenaza al patrimonio estatal, toda vez que podría representar un detrimento que por demás es ilegal y si la entidad tiene la facultad en la expedición de los actos administrativos proferidos, los cuales son objeto de control jurisdiccional. Es por tal razón que a la ejecutante le asiste la posibilidad de incoar demanda contra dichas decisiones, lo que indica que esta parte no queda desprotegida frente a la conducta de la Administración.

Dicho de otra forma, el contencioso subjetivo es el escenario indicado para valorar las objeciones presentadas por la UGPP y de contera determinar el alcance de lo dispuesto por la Corte Constitucional, habida cuenta que han sido reiterados los pronunciamientos de dicha Corporación a partir del año 2009 relativos a las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud por parte de los beneficiarios de la pensión gracia.

En lo que respecta al presente proceso ejecutivo, se reitera, no se puede predicar la satisfacción de los requisitos formales de uno de los documentos que integran el título de ejecución, como lo es el acto administrativo de cumplimiento de la decisión judicial reclamada, pues la fuerza ejecutoria de este instrumento quedó comprometida cuando, dentro de la misma actuación administrativa, de forma posterior fueron proferidos otros actos que presentaron salvedades sobre el cumplimiento de la obligación fundamentadas en pronunciamientos, actos que como se afirmó en precedencia gozan de la presunción de legalidad.

RADICACIÓN : 2019-00227-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : HUGO EMIR CARDONA OROZCO
Demandado : MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI



Por tanto, el Despacho concluye que estuvo mal denegado el mandamiento de pago solicitado por el señor Hugo Emir Córdoba Orozco en contra del Municipio de Santiago de Cali, por lo que el auto nro. 562 del 16 de septiembre de 2019 será revocado para que el Juzgado 15 Administrativo de Cali analice los requisitos formales y de fondo que establece la ley para decretar o no el mandamiento de pago solicitado en la demanda.

Por lo expuesto, se revocará el auto nro. 562 del 16 de septiembre de 2019. En consecuencia, se

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto nro. 562 del 16 de septiembre de 2019 proferido por el Juzgado 15 Administrativo de Cali.

SEGUNDO: En firme esta providencia, el *a quo*, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, analizará si el título ejecutivo presentado por el señor Hugo Emir Cardona cumple los requisitos formales y de fondo previstos para librar mandamiento de pago en contra del Municipio de Santiago de Cali.

TERCERO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PATRICIA FEUILLET PALOMARES
Magistrada

Vo.Bo Secretario